

Santiago, uno de abril de dos mil veinticuatro.

Al escrito folio N° 28.111-2024: a lo principal, téngase presente; al otrosí, como se pide.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el abogado don Andrés Alvear Valdés, en representación de la Comunidad Pueblo del Inglés, en estos autos sobre reclamo judicial de resolución administrativa seguidos ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, dedujo recurso de queja en contra de los ministros de la Corte de Apelaciones de esa ciudad, señor Hernán Crisosto Greisse, señor Mario Rojas González, y del señor Sergio Córdova Alarcón (s), por haber dictado, con falta y abuso grave, la resolución de quince de febrero del año en curso, que confirmó la de primera instancia que declaró la incompetencia de la judicatura laboral para conocer la reclamación interpuesta.

Expone que con fecha 4 de agosto de 2023 le fue notificado el término del procedimiento de fiscalización y la aplicación de multa por no cumplir con la exhibición de la documentación solicitada, decisión por la que presentó el 8 de septiembre de 2023 ante la Inspección comunal del Trabajo respectiva, solicitud de sustitución de multa cursada por capacitación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 506 ter del Código del Trabajo, la que fue rechazada el 20 de octubre de 2023 al estimarse que no se corrigió la infracción. Por dicha decisión presentó reclamo judicial, iniciándose la sustanciación de los presentes autos, en los que el 29 de enero de 2024 se celebró la audiencia preparatoria, determinándose la incompetencia del tribunal para conocer del asunto, al considerar que no existe posibilidad de reclamar judicialmente de la decisión acerca de la sustitución de multa presentada ante el órgano administrativo, la que fue confirmada por los ministros recurridos, incurriendo en faltas y abusos graves en su dictación, porque se vulnera la normativa sobre control judicial de los actos dañosos de la administración prevista en el artículo 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República, limitándose el control jurisdiccional sobre los órganos de la administración.

Agrega que lo resuelto implicó que se le privara de su derecho de acceder a la jurisdicción, desatendiendo el principio de inexcusabilidad, regulado tanto a nivel constitucional como legal, el que se vincula con la noción de debido proceso y, específicamente, con el ejercicio del derecho a la acción, prerrogativa de naturaleza fundamental que incluye tanto el derecho de acceso a la justicia como el de tutela efectiva del derecho que se reclama. De esa manera -señala-, el artículo 420 letra e) del Código del Trabajo en caso alguno descarta la posibilidad de la reclamación judicial contra el rechazo administrativo a la sustitución de



multa, máxime si el artículo 504 del mismo cuerpo legal alude a las reclamaciones que procedan, teniendo presente que la interpretación que se haga de las normas no puede llevar a un absurdo como ocurrió en el presente caso.

Solicita, en definitiva, se acoja el recurso de queja, se invalide la resolución impugnada y se declare la competencia del tribunal de la instancia para conocer de la acción deducida, disponiéndose su tramitación.

Segundo: Que, al evacuar el informe de rigor, la judicatura recurrida sostuvo que la sentencia impugnada se ajustó a derecho, pues se indicó el argumento que la sostiene, cumpliendo con la exigencia legal de motivación, al estimar que los argumentos del apelante no desvirtuaron la correcta interpretación efectuada por la juez de la instancia, quien estimó que el artículo 506 ter del Código del Trabajo no contempla la posibilidad de reclamación judicial, lo que resulta concordante con su artículo 504, que exige para la sustanciación de la reclamación que se establezca la posibilidad de aquello; lo que aleja toda posibilidad de que en el ejercicio de la función jurisdiccional se incurriera en una falta o abuso "grave" susceptible de corregirse con el uso de facultades disciplinarias, tratándose más bien de una cuestión de interpretación, en la que estiman no haber cometido falta o abuso y, menos aún, una que amerite corrección disciplinaria.

Tercero: Que el recurso de queja se contiene en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, que trata "De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales", y está reglamentado en su párrafo primero que lleva el epígrafe de "Las facultades disciplinarias", que, conforme lo dispone su artículo 545, procede sólo cuando en la resolución que lo motiva se haya incurrido en falta o abuso constituidos por errores u omisiones, manifiestos y graves.

Cuarto: Que de estos antecedentes y de los que se contienen en la carpeta digital tenida a la vista, se desprende que la Comunidad Pueblo del Inglés fue sancionada por la Inspección del Trabajo con una multa por un monto de 26,73 ingresos mínimos mensuales por no exhibir toda la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización, sin que dedujera la reclamación y reconsideración a que se refieren, respectivamente, los artículos 503 y 511 del Código del ramo; sin embargo, planteó la sustitución de la multa en conformidad con lo dispuesto en su artículo 506 ter, petición que fue denegada por tal repartición porque no adjuntó la documentación descrita en el hecho infraccional, no acreditando con ello la corrección de la infracción que dio origen a la multa; decisión que impugnó ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago a través de reclamación en procedimiento de aplicación general.



Pues bien, para la judicatura, el artículo 420 letra e) del Código del Trabajo entrega competencia a los juzgados laborales para conocer las reclamaciones presentadas en contra de resoluciones administrativas “que procedan”, indicativa de que no todas son impugnables, reglamentándose dos hipótesis en el título respectivo contenidas en los artículos 503 y 511, todos del citado código, advirtiéndose que la reclamante no las ejerció oportunamente, puesto que solicitó la sustitución de la multa cursada al tenor del artículo 506 ter número 2, petición que fue denegada, resolución que no se contempla en las citadas disposiciones como susceptible de revisión, por lo que en el aspecto tratado la ley no previó un mecanismo recursivo, conclusión que entiende ratificada por el tenor del artículo 504, que hace mención sólo a aquellos casos en que en virtud del mencionado texto u otro cuerpo legal se establezca tal herramienta procesal; razones que consideró suficientes para declararse incompetente y no entrar al conocimiento del asunto descrito.

Quinto: Que las competencias que corresponden a los juzgados del trabajo se encuentran determinadas por el artículo 420 del Código del ramo, que, en su literal e), refiere “*las reclamaciones que procedan contra resoluciones dictadas por autoridades administrativas en materias laborales, previsionales o de seguridad social*”.

El Título II del Libro V del citado código, regula los procedimientos de reclamación de multas y demás resoluciones administrativas, consagrando su artículo 503 aquellas destinadas a objetar las que impongan sanciones pecuniarias por infracciones a la legislación laboral y seguridad social, en tanto que su artículo 504 establece el procedimiento monitorio como la fórmula procesal idónea para conocer judicialmente de tales medios recursivos en dos hipótesis, tratándose de dictámenes que no imponen multas y en contra de resoluciones de naturaleza distintas a tales penas o de la que se pronuncie acerca de una reconsideración al castigo dinerario impuesto. Finalmente, el artículo 511, ubicado en el título final del libro aludido, reglamenta la posibilidad de reconsideración por parte de la entidad administrativa en el caso que indica.

El artículo 506 ter establece un mecanismo específico para las micro y pequeñas empresas de sustituir una multa en el caso que no hubiese utilizado las vías recursivas de los citados artículos 503 y 511, como sucede en este caso, estipulando sólo los efectos de la decisión estimativa, puesto que en caso de ser denegada, la ley no dispuso qué medida recursiva resultaba procedente.

Sexto: Que es precisamente del tenor del artículo 506 ter del Código del Trabajo que la judicatura desprende la impertinencia de la reclamación judicial, en relación con sus artículos 420 letra e), 504, 503 y 511, puesto que se alza como



un requisito de procedencia no incoar las impugnaciones contenidas en estas dos últimas disposiciones y porque la norma que entrega competencias a los juzgados laborales sólo se refiere a determinados casos en que tal mecanismo procesal proceda, concluyendo que la legislación no consideró a todas las resoluciones administrativas como actos susceptibles de reclamación, siendo uno de éstos la negativa de la Inspección a acceder a la sustitución de la multa impuesta a la empresa infractora.

Séptimo: Que, conforme se expresó, el recurso de queja corresponde a un arbitrio que emana de las facultades disciplinarias de las Cortes, que solamente procede cuando en la resolución que lo motiva se haya incurrido en falta o abuso constituidos por errores u omisiones, manifiestos y graves.

Octavo: Que, entonces, la interpretación que se formula en el libelo que se analiza no puede ser atendida, desde que la asumida por la impugnada aparece como la correcta de acuerdo al recto entendimiento de las normas pertinentes, por cuanto se dedujo reclamación contra la decisión que no dio lugar a una solicitud de sustitución de multa efectuada conforme el artículo 506 ter número 2 del estatuto laboral, que otorga tal beneficio sólo a micro y pequeñas empresas, y por una vez en el año, que no hayan recurrido conforme a sus artículos 503 y 511, que son las reclamaciones respecto de cuya decisión se considera la posibilidad de control judicial, y, por lo tanto, encuadrables en el literal e) del artículo 420 antes transcrito.

Por estas consideraciones y normas citadas, **se rechaza** el recurso de queja deducido en contra de los integrantes de la Corte de Apelaciones de Santiago ya mencionados, por haber pronunciado la resolución de quince de febrero pasado.

Regístrese y agréguese copia autorizada de la presente resolución a los antecedentes tenidos a la vista, los que deberán devolverse en su oportunidad; hecho, archívese.

Rol N° 6.850-2024.-





QCQSMWDMTQ

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por Ministra Andrea María Muñoz S., Los Ministros (As) Suplentes Juan Manuel Muñoz P., Eliana Victoria Quezada M. y los Abogados (as) Integrantes Leonor Etcheberry C., Fabiola Esther Lathrop G. Santiago, uno de abril de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a uno de abril de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

